

ESTADO, VIOLENCIAS Y TEMORES CIUDADANOS.

Dr. Luis E. Ocampo Banda.
locampo@mazatlan.udo.mx

M en C Ma. Guadalupe Vargas Alvarado.
mvargas@mazatlan.udo.mx

Integrantes del Cuerpo Académico PSICOSOCIAL.
Universidad de Occidente, Unidad Mazatlán
Mazatlán, Sinaloa, México

Introducción

América latina se desenvuelve con diversos niveles de conflictividad y gobernabilidad que llaman a cuestionar la esencia de las acciones gubernamentales y el que hacer mismo del Estado. En la base se encuentra el modelo económico neoliberal, globalizado y mercantil que busca apropiarse y determinar el nuevo tipo de relaciones económicas y sociales que han de dar forma y sentido a las nuevas identidades. En la parte ideológica tenemos un Estado que no construye más comunidad, que dejó de ser el elemento catalizador que permitía construir identidad y pertenencia social y que hoy cada día se encuentra más ausente, separado de la sociedad aun y cuando mediáticamente se convoque a una alianza social contra la violencia y la delincuencia.

En México el problema de la delincuencia alcanza niveles de verdadera preocupación para la sociedad, por una parte el crimen organizado que pelea plazas para la venta y el tráfico de drogas, el auge de los secuestros y la presencia de diferentes fuerzas de seguridad pública tanto federales como estatales y municipales enrarecen el ambiente y generan confusión y miedo en el conjunto social.

Los fracasos del gobierno en el combate al crimen organizado se transforman en argumentos sólidos para legitimar las bases de un Estado autoritario con exigencias de mano firme, el incremento de recursos financieros para el combate al delito, así como mayor capacidad de maniobra para los cuerpos de seguridad mediante la adecuación y modificación de leyes y reglamentos (**Ocampo, 2008: 105-128**)

La sociedad civil se muestra incapaz de enfrentar y dar salida al cúmulo de temores que la violencia siembra en su paso por los municipios, colonias, plazas y avenidas de nuestras ciudades. La sociedad atemorizada se vuelve retraída, anodina ante la andanada de hechos, información mediática y rumores que de boca en boca, por la Internet o celulares circulan en el conglomerado social y alertan ante la real o ficticia presencia de actos delictivos o de personas armadas o en "actitud sospechosa", así como por la movilización inusual, -aunque ya empieza a ser cotidiana-, de cuerpos de

seguridad fuertemente armados y encapuchados que difícilmente logran generar confianza en los ciudadanos.

Así, la sociedad civil vive atemorizada, con sentimientos de indefensión e impotencia y con expresiones de paranoia estimuladas por una sensación de temor, viéndose obligada a modificar las formas de socialización, los hábitos de consumo, y diversión de las familias en un intento de protegerse o bien defenderse de la posible agresión a la que se siente expuesta ante la percepción de un ambiente de violencia matizado con elementos de realidad.

De esta manera, hoy todo extraño se convierte en un potencial delincuente, y el estado de alerta debe ser permanente para evitar formar parte de las estadísticas que muestran, o intentan mostrar, los índices de criminalidad o delincuencia en un área geográfica o lugar de tránsito o de encuentro social.

La sociedad mexicana asume como cotidianas diferentes formas de ser violento que se instalan en los imaginarios y formas de ser y de valorar de la población modificando con ello una serie de prácticas sociales que buscaban construir comunidad arrojando saldos negativos en la integración social. La violencia es entendida por Guerrero (1997) o McAlister (1998) como el uso o amenaza de uso de la fuerza física o psicológica con intención de hacer daño de manera recurrente y como forma de resolver los conflictos. Así, la explicación a las prácticas violentas y los aspectos a esta relacionados como lo son la agresión y la frustración tenemos que encontrarlos en un cúmulo de factores de índole tanto psicológicos, como económicos, sociales, políticos y culturales. Tenemos entre las manos un hecho que obedece a un conjunto de causas, donde la interdependencia encubre los orígenes y las consecuencias de las prácticas sociales que impactan las normas básicas de convivencia social de la misma manera que dificulta la visión de las diversas acciones de afrontamiento al no ser consideradas en las propuestas de alternativas de solución o control de las conductas violentas y situar a estas desde una perspectiva lineal.

Estado cuestionado, ciudadanía excluida.

A lo largo y ancho de nuestro país la población mexicana vive un conjunto de procesos que de manera frecuente llaman a cuestionar la naturaleza, la eficiencia y la eficacia de las instituciones que nos gobiernan.

Hoy, la ciudadanía se moviliza -intermitente y atomizada-, demandando democratización de la sociedad y por el derecho de elegir las formas de organización y participación político-ciudadana al margen de los partidos políticos y de otras formas de representación colectiva.

Las ciudadanías se movilizan como respuesta al despojo de sus tierras, caseríos, empleos, servicios de salud. La ciudadanía está aprendiendo a recorrer las vías oficiales-formales, utilizando para ello diversas formas de organización social y laboral

como los partidos políticos y los sindicatos a la par que asumen o reivindican la acción directa.

La lucha y los actores movilizados se multiplican y se diversifican los reclamos, hoy se lucha por los derechos de los campesinos, los indígenas, la propiedad de la tierra, los movimientos populares urbanos se manifiestan en acciones que superan la sobrevivencia y se han transformado en expresiones de resistencia frente al modelo neoliberal. Manifiestan y hacen patente su divorcio ante el Estado, los partidos políticos y los sindicatos. La lucha es por la creación de modos y formas alternativas de ejercicio del poder. Un poder más autónomo y ligado a las bases demandantes.

Las acciones que van desde la defensa de los intereses públicos y los reclamos por el respeto de los derechos privados, no solo de individuos sino de grupos con demandas particulares son elementos de confrontación y contención en contra de los valores mercantiles impuestos por el mercado y el Estado. El sistema de valores, las formas de sociabilidad y en conjunto las prácticas sociales se modifican llevando al individuo, y a los colectivos a diversos niveles de producción de subjetividades. La ciudadanía movilizada contribuye a la democratización real no solo del sistema político, sino de la sociedad en su conjunto al incorporar nuevos procedimientos, reglas y formas de organización que politizan cuestiones que en un momento fueron consideradas como de interés o de la esfera de lo privado, pero que hoy asumen el carácter de públicas, como pueden ser las relaciones de género.

Para Marshall (1950) la ciudadanía es un estatus de pertenencia a una sociedad y es conferido a quienes son miembros con plenos derechos en una específica comunidad. Estos derechos los divide en tres ámbitos, los derechos civiles referidos a la libertad individual, de pensamiento, palabra y fe, el derecho a la justicia y a la propiedad. Los derechos políticos están referidos a la capacidad para participar en un cuerpo dotado de autoridad política o bien, como elector de ese cuerpo. Y los derechos sociales por su parte se refieren al bienestar económico, la seguridad, y a vivir de acuerdo a estándares de bienestar prevalecientes en la sociedad

Sin embargo no es ajeno el escuchar en reuniones de café, en el transporte público o bien en los espacios de encuentro social diversas expresiones que tienden a poner en duda la capacidad de las instituciones para garantizar el cúmulo de derechos como el empleo, y estos justamente remunerados, así, por ejemplo tenemos que de los 800 mil empleos proyectados para el año 2008 solo se lograron abrir 300 mil plazas según informa la Secretaria de Hacienda. Queda aquí la duda de que ha de pasar con los cerca de medio millón de personas que no se han de incorporar a las actividades productivas y de servicios.

Ramonet (2009) en su trabajo **La explosión del desempleo** anota un escenario adverso al crecimiento económico y el empleo:

“Causa de pobreza, de angustia y de exclusión, la lepra del desempleo se extiende. En Estados Unidos, la recesión ha destruido 3,6 millones de puestos de trabajo, a un ritmo nunca visto. La mitad durante los últimos tres meses. El total de parados ya asciende a 11,6 millones. Y firmas gigantes como Microsoft, Boeing, Caterpillar, Kodak, Pfizer, Macy's, Starbucks, Home Depot, SprintNextel o Ford Motor planean desprenderse de 250.000 asalariados en 2009. La confianza de los consumidores se ha desplomado.

En Sudamérica, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en 2009, se registrará un aumento de 2,4 millones de desempleados. Si bien los países del Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay), así como Venezuela, Bolivia y Ecuador, podrían capear el temporal, varios Estados centroamericanos, México y Perú, por sus lazos con la economía estadounidense, sufrirán.

*El director general de la OIT, Juan Somavía, estima que el número de desempleados en el mundo (190 millones en 2008) podría incrementarse en 51 millones más a lo largo de 2009. Y recuerda que los trabajadores pobres (que ganan apenas dos euros diarios) serán 1.400 millones, o sea el 45% de la población activa mundial. **(Ramonet: 2009)***

Elemento no menos importante es la crisis de los mercados financieros internacionales y en este caso el de nuestro vecino del norte donde los aproximadamente 400 mil compatriotas que por año se dirigían a este país encontrarán condiciones -más- adversas para su incorporación en el mercado laboral y el consecuente envío de remesas.

El incremento en los precios de la canasta básica, y el delicado tema del crimen organizado y la guerra declarada entre los diferentes grupos delictivos, y de estos en contra del Estado forman parte del paisaje económico y social-político que refleja nuestro tiempo.

Así, lo que tenemos es un conjunto de variables macro que ilustran y refuerzan la duda que la sociedad civil ha desarrollado con respecto de la competencia del Estado y sus instituciones como órganos mediadores y orientados a la resolución de conflictos.

El Estado mexicano se encuentra inmerso en dos grandes vertientes de crisis, por una parte tenemos el problema del crimen, la violencia y la delincuencia organizada que cotidianamente cubren de sangre cientos de hogares. Por otra parte podemos señalar la estrepitosa caída de los mercados financieros internacionales. Hoy nos encontramos ante la crisis del modelo capitalista a nivel mundial. *Crisis económica* desatada por la debacle de un sistema financiero desmecatado que mediante apalancamientos sin sustento pospuso la larvada crisis de sobreproducción; descalabro que se ha extendido a la economía material ocasionando masiva destrucción de capital redundante y de ahí a la vida real donde arrasa con el patrimonio de las personas **(Bartra: 2009)** Los derechos sociales de la ciudadanía se ven afectados de manera directa provocando oleadas de desempleo, baja de los salarios en términos reales, y del poder de compra

de los consumidores a nivel mundial. Así, la crisis debemos ubicarla en sus justos marcos de sobreproducción y la acumulación de las contradicciones inherentes al modelo capitalista. El golpe ha sido mayúsculo, y las economías globalizadas se tambalean en conjunto.

El capitalismo especulativo-financiero internacional nos muestra su decadencia y queda a la espera del dinero público como único instrumento de sobre vivencia. La crisis que a nivel de los mercados financieros se presenta encuentra parte de su explicación en las deslocalizaciones de empresas, las compras y fusiones de bancos, los llamados paraísos fiscales y la ausencia de regulaciones en los marcos de la globalización neoliberal. A esta crisis de los mercados financieros internacionales México no es ajeno, y no nos ha significado una simple gripe, por tener una economía “blindada” como algunos funcionarios federales pretendieron hacernos creer. Las repercusiones aun no han sido cuantificadas, y tan solo conocemos la punta del iceberg que junto al crimen organizado y la violencia, que a últimas fechas le ha sido inherente, amenazan con debilitar la presencia ya deteriorada del Estado.

En este escenario macro se fortalece la duda sobre la capacidad del Estado para enfrentar y llevar a buen puerto a la sociedad civil, el Estado es cuestionado y puesta en duda su capacidad para gobernar. De ahí que se hable de un Estado ausente para un amplio sector de la sociedad, un Estado burocrático-administrativo alejado de vida política y económica (**Lewkowics, 2006: 20-31**), de la negociación y la mediación.

El imperio de la ley y del estado de derecho es cuestionado en Latinoamérica, y en México tenemos asentadas fuertes percepciones sobre desigualdad, pobreza, falta de igualdad ante la ley y corrupción. Según el barómetro latinoamericano en México solo el 25% de la población confía en que entre los mexicanos existe igualdad ante la ley (**Latinobarometro, 2007**) en tanto que para el resto de la población las instituciones que imparten justicia quedan en tela de juicio. Ahora bien, si la ciudadanía no percibe que se cumple con sus derechos a recibir justicia, no es de extrañar que se niegue a cumplir con obligaciones que de igual forma le pudieran aparecer como ajenas. La cultura cívica es devaluada en tanto la desigualdad se impone deteriorando el Estado de derecho.

Si sumamos a lo anteriormente reseñado la percepción sobre la corrupción que recorre a las múltiples dependencias gubernamentales en sus diversos niveles, tomar por ejemplo que según el **Índice de Percepción de la Corrupción (IPC)** México ocupa el lugar 72 y tiene 3.3 en una escala del 0 al 10 en tanto que naciones como Chile se encuentra en el lugar 23, con una puntuación de 6.9 siendo la nación latinoamericana que presenta los menores niveles de percepción de corrupción.

Según la medición del **Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno (INCBG)** de 32 estados que conforman la República, Sinaloa ocupa el número 19 según la percepción de corrupción de la sociedad sinaloense con un 8.1 en tanto la media nacional es de 10.0.

Para el INCBG en el 2007 los actos de corrupción para la prestación de servicios públicos a nivel federal, estatal o municipal represento una erogación de 197 millones de pesos, en tanto que los hogares destinaron el 8% de su ingreso a cubrir este rubro. **(INCBG, 2007)**

En el abanico de expresiones de descontento social tenemos movilizaciones que responden, que son reactivas frente a acciones que consideran impactan desfavorablemente sus derechos sociales o políticos. La desatención a las demandas de los maestros principalmente en los estados del centro y del sur recientemente en el estado de Morelos constituye tan solo uno de los múltiples ejemplos de lo que puede suceder ante la creciente desesperación de un conjunto de actores sociales ante la incapacidad real de alcanzar los beneficios y derechos que les son regateados por un sistema que día a día se aleja de la negociación política y de la vida democrática.

Las grandes modificaciones en la economía como son la flexibilización del empleo y la proliferación de puestos flexibles, horarios variables, o de medio tiempo, contrataciones por tiempo u obra determinada implican una protección social y jurídica limitada o inexistente, la desregulación, y crisis actual de los mercados financieros, las políticas públicas que hoy de manera abierta impulsan los intereses del gran capital y la consecuente mercantilización de las políticas de bienestar social. Las desigualdades sociales y económicas muestran una mayor brecha, el Estado se muestra incapaz de contener la exclusión, la marginación y la estigmatización de personas y zonas urbanas.

Frente a la ausencia de formas de organización colectiva que posibiliten a la ciudadanía construir identidad y estar así en condiciones de desarrollar demandas colectivas en el espacio público tenemos una ciudadanía activa y movilizadora que se muestra aun incapaz de incidir de manera contundente en el diseño e instrumentación de políticas públicas que redunden en beneficio del cúmulo de derechos escamoteados.

Así mismo la tentación de pasar del señalamiento, la enunciación y criminalización de las protestas a la represión como forma de solucionar el problema tal vez sea enorme, como enormes serian los costos de una acción represiva instrumentada desde el Estado en momentos en que la agenda nacional reclama dialogo y construcción de salidas negociadas. La apuesta a criminalizar a los diversos movimientos sociales que reclaman atención a sus demandas, y la desatención o incapacidad para dar solución a las mismas nos arrojan como resultado un escenario de crisis y desencanto que pone de manifiesto la ausencia del Estado como órgano mediador y de resolución de diferencias.

En México vivimos con un Estado cada día más ausente en ciertas áreas de la vida nacional, nociones como patria, nación, patriotismo cada día se alejan más de los imaginarios sociales creados por el Estado pos revolucionario y refrendados por la ciudadanía como propios. Los medios de comunicación constantemente deterioran las nociones que en algún momento nos dieran identidad, y nos abren a un mundo globalizado, donde de manera constante se deteriora la llamada identidad nacional.

El mercado y el consumo se posicionan en los nuevos imaginarios, el ciudadano es sustituido por el consumidor, el Estado por el mercado y el nuevo referente subjetivo para construir identidad es el consumo y el consumidor, ya no más los derechos civiles, políticos y sociales que construían identidad, y que son el legado de generaciones de lucha por construir una sociedad democrática, con ciudadanos igualmente comprometidos con el sistema democrático.

En este contexto es necesario que se indague que paso, y que está ocurriendo en la sociedad, en las subjetividades, en el imaginario de los pobres, los desempleados y reprimidos, en quienes pugnan por ser reconocidos como ciudadanos con nuevos reclamos y derechos que vindicar y quienes luchan por los derechos universales. En síntesis, las subjetividades cambiaron al aparecer nuevos reclamantes, nuevas realidades y estas deben de ser explicadas. Ante el asomo de nuevos comportamientos y actores sociales reclamantes se construyen nuevas estructuras de representación. **(Ocampo, 2007: 113-131)**

El Estado se encuentra ausente de la política, se descentra, y no es más el eje rector que guía las relaciones entre los diversos actores políticos, económicos y sociales, los partidos políticos no representan más a la ciudadanía, y más bien se encuentran de espaldas a esta, inmersos en la acción legislativa y ocupados en vivir del presupuesto más que en atender al cúmulo de demandas que la ciudadanía presenta. La ciudadanía se muestra alejada, si no es que decepcionada de la política y de los partidos políticos, se queda sin referente de a quien endosarle sus demandas. Los sindicatos al igual que otros actores políticos tradicionales se encuentran sin presencia que les legitime como representantes y defensores de sus agremiados, los trabajadores no creen más en los órganos de representación tradicional y buscan nuevas formas de reconocimiento y de lograr mantener vigentes sus derechos.

Hoy la ciudadanía se expresa de manera atomizada, independiente y fragmentada, por demandas concretas de techo, empleo, salud y educación como demandas elementales para intentar conservar lo que el modelo económico constantemente le arrebató.

De ahí, que no resulta extraña la acción directa hoy por hoy como una forma de accionar de grupos sociales que no se sienten reconocidos ni representados por el Estado y sus diversos órganos de representación. Al quedar el individuo sin referentes identitarios, sin elementos que le den identidad y pertenencia, no es de sorprender que asuma un conjunto de prácticas y acciones que bien pueden ser atentatorias contra la propiedad o la vida, y que se distancien de las estructuras burocráticas y legales de atención a la ciudadanía.

De temores y violencias.

El Estado transformó y deformó su función distributiva del producto nacional en formas groseras de clientelismo y filantropía, al servicio de los grandes monopolios del comercio, fomentando con ello lo que se considera el cáncer de la “economía informal”, luego de haber llevado todos los procesos económicos por el camino del librecambismo. **(Rascón. 2009)** Lo que tenemos es una ciudadanía que no logra reconocerse como sujeto de derechos en tanto acepta de manera pasiva la imposición de un modelo económico y político en crisis y que cada día atenta en contra de sus derechos.

Un sujeto no incorporado, no beneficiado por las políticas públicas, que no se siente representado, ni legislativa, ni política, ni laboralmente, por que posiblemente ni empleo posea. Que se encuentra en la margen del camino y no logra incorporarse a los servicios educativos, de salud, de protección social se encuentra condenado irremediabilmente a engrosar las filas de los desempleados, los marginados y posiblemente del crimen organizado.

La ciudadanía enfrenta la amenaza no solo del desempleo sino de la carencia de una serie de servicios y prestaciones ligadas a la subsistencia misma como pueden ser el agua potable o la tierra dedicada al cultivo y la producción de alimentos. En el horizonte se vislumbra un decremento en el ejercicio de los derechos sociales de los individuos. Por ello es necesario que la ciudadanía se habilite en la exigibilidad de sus derechos sociales, económicos y culturales en la diversidad de espacios y procesos donde se dirimen las posibilidades reales de ejercicio de los mismos. **(Cunill Grau, 2009: 3)**

En síntesis, un individuo que no es representado por nadie, ni representa nada, un individuo desconectado de sus iguales, del mercado y la sociedad, se encuentra en tal estado de vulnerabilidad y de exclusión que no es de extrañar que asuma roles y conductas que atenten en contra de otros individuos o colectivos sociales, mismos que le resultan ajenos, y posiblemente amenazantes.

El modelo económico neoliberal prometía empleo, servicios y bienestar para las mayorías, hoy es un modelo en crisis –a nivel mundial el derrumbe de los mercados financieros así lo pone de manifiesto-, promesa que no ha podido cumplir a lo largo de los años, en cambio ha demostrado y puesto sobre la mesa su incapacidad para enfrentar y solucionar la pobreza, la exclusión y marginación que viven nuestras sociedades en los marcos de una sociedad patriarcal y depredadora.

La andanada en contra de los derechos sociales se pone de manifiesto y por ejemplo se anota la consideración presentada por la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo (OCDE) misma que estima en mil 800 millones de personas es decir más de la mitad de la población activa en el mundo trabaja al margen de contratos laborales y de beneficios sociales en tanto que mil 200 millones de personas trabajan empleados con prestaciones en el mundo. Así la llamada crisis financiera amplía el número de personas que se incorporan al empleo informal. Para Latino América en el periodo de

2000-2007 el índice fue de 57%, en tanto que para México en el mismo periodo la informalidad laboral alcanzo el 50.1%.

Lo que hoy tenemos en nuestras plazas, y avenidas es temor, miedo ante el encuentro de un desconocido que seguramente es un sujeto violento y del que debemos huir, nuestros hogares tenemos que protegerlos implementando nuevas medidas de seguridad ante el temor de ser asaltados. Cada acción de protección desarrollada por la ciudadanía es a su vez generadora de modificaciones en el comportamiento social, las nuevas relaciones sociales se construyen en los marcos de la desconfianza, la agresividad y el individualismo. Los espacios públicos se pierden, se deterioran como centros de expresión y de reunión comunitaria, en tanto que en la ciudad las “murallas urbanas” segregan de la vida social, de “los otros”, desmeritando el precepto de ciudadanía.

En un mundo diverso y cambiante la lucha es por desarrollar una racionalidad diferente a la racionalidad de mercado, y un nuevo conocimiento que nos permita apropiarnos de esa nueva diversidad y construir un sentido distinto en las lógicas de comportamiento emprendidas por las ciudadanías, ciudadanías críticas aun invisibles –por su intermitencia-, pero significativas por su capacidad de reclamo en atención a sus demandas centrales. Así, la apuesta es por impedir caer en la trampa mañosa que tiene como estrategia sembrar el miedo, el retraimiento social, la confusión y paranoia difundido por los medios de comunicación en voz e imágenes que pugnan por cubrir a la sociedad civil con el manto del miedo y el silencio castrante **(Ocampo, 2008: 105-128)**.

Las percepciones contienen en sí mismas un alto grado de subjetividad, y son por tanto necesariamente abordadas con la prudencia que el caso requiere debido a que son construcciones de valor relativo y coyuntural asociadas a los contextos sociales e impactados directamente por las experiencias, los rumores, y los medios de comunicación.

La violencia no podemos aceptar que sea presentada como un problema de salud pública, o de hechos aislados ejecutados por sujetos desadaptados que solo buscan imponer su forma de vida y ser exitosos en el mercado, que por cierto no es invención de ellos, sino que estos son solo uno más de los sujetos que bajo la ideología de consumo buscan ser beneficiados por una economía de mercado que privilegia el tener sobre el ser. La violencia tenemos que reconocerla como un hecho social que se construye y articula en un conjunto de variables que se entrecruzan y dan sentido y razón a nuevos actores organizados, más deshumanizados, tal vez, pero al final son el producto de relaciones sociales que actores institucionales fueron incapaces de incorporar al mercado de trabajo, educativo, desprotegidos por las políticas públicas, y la sociedad. Son individuos “desechables” o “superfluos”, **(Bauman, 2005)** por su bajo nivel de habilitación laboral, o bien por la escasa incorporación de los valores dominantes a sus estilos de vida bajo la ausencia del actor central en la construcción del dialogo, de la identidad, y la pertenencia social, hacemos referencia al Estado.

Podemos aquí afirmar que la violencia en sus diversas formas de presentación encuentra entre sus elementos multicausales una crisis de identidad, representación y pertenencia donde los agentes o redes de socialización no lograron incorporar en los sujetos que hoy construyen nuevas y paralelas escalas de valores, y de formas de relacionarse para con el otro. El otro anónimo, carente de derechos salvo los que sea capaz de conquistar por la pertenencia a un grupo, los roles que juega en una estructura o bien por el ejercicio de la violencia como forma de legitimar el poder y de ganar reconocimiento en una sociedad que lo excluyo por su incapacidad para incorporarse de manera exitosa al mercado y al consumo.

La violencia como construcción social se asienta en los imaginarios del colectivo bañando a la sociedad de temor e incertidumbre. Cada esquina, plaza y avenida se transforman en zonas de riesgo, el delincuente y la violencia asechan, se agazapan en los lugares menos pensados y el ciudadano debe ser precavido y estar en condiciones de enfrentar y/o huir del área de peligro.

El retraimiento social como consecuencia de la incertidumbre que provocan las sucesivas olas de violencia, que para el caso mexicano se han constituido más bien en tsunamis con crímenes de alto impacto que día a día se fortalecen, rebasando al Estado, y poniendo de manifiesto la debilidad de las instituciones encargadas de regular la seguridad interna del país.

Según encuesta de medición internacional en el 2007 solo el 10% considera que es más seguro vivir en México, este 10% bien pudiera representar a parte de los sectores económicos pudientes en el país, para los cuales el delito y la violencia se mantienen distantes vía la utilización de murallas y cuerpos de seguridad que lo posicionan en percepciones de seguridad altas. **(Latinobarometro, 2007)**

Conclusiones provisionales

El reto, la tarea pendiente es la construcción de un Estado fuerte, presente en la construcción de polis, en la recuperación de la política como mecanismo de reconocimiento, reconciliación y resolución de conflictos. Asimismo, es imprescindible la construcción de una ciudadanía más comprometida en la defensa de sus derechos cívicos, políticos y sociales. De este tamaño es el reto y la matriz social exige la participación de una multiplicidad de actores sociales y políticos.

La violencia estructural **(Galtung, 2006)** genera pobreza, exclusión, desigualdades sociales, estructuras violentas que a la par terminan por generar violencia. La paradoja aquí se ubica en como las estructuras sociales que debieran de garantizar empleo, educación y salud entre otros satisfactores, en el actual modelo económico solo logran generar pobreza y exclusión en las grandes mayorías.

La ciudadanía exige seguridad entendida esta como calidad de vida y dignidad humana con libertad, acceso al mercado y al consumo, el combate a la pobreza, la discriminación y la represión política, así como al miedo que día a día se asienta en nuestras ciudades ante la incapacidad ciudadana de imponer un hasta aquí, y la insuficiencia del Estado para contrarrestar las constantes incursiones del crimen organizado.

La necesidad de expresión de esta nueva ciudadanía no se puede circunscribir a aquellos sectores que periódicamente participan en la democracia procedimental o electoral, en concordancia a la coyuntura política y que, en concomitancia al vaivén de los actores políticos centrales son convocados a manifestarse mediante la emisión del voto y nos son presentados, vía los medios de comunicación como pilares de la democracia por emitir su voto. Aquí la apuesta tiene que ser por construir un ciudadano informado, capaz de participar de manera crítica en los procesos electorales, de organizarse y exigir a los partidos políticos y al Estado resultados y atención a sus demandas y reclamos sociales por un bienestar que brinde las satisfacciones oportunas y suficientes en rubros como el empleo, la educación y la salud. La búsqueda es por construirse como un ciudadano emancipador que pugne por el respeto de los derechos civiles, políticos y sociales.

La violencia es en síntesis sustancialmente contraria al espíritu democrático, impide la libertad de expresión, de tomar decisiones, de transitar por los espacios públicos, de construir comunidad y de reflexionar colectivamente sobre lo que le es significativo a un conjunto de ciudadanos que ante el temor de ser víctimas de algún delito recurren al silencio y la reclusión voluntaria ante los referentes reales o alarmistas de violencia. Un caso específico e ilustrativo de auto reclusión, de toque de queda auto impuesto lo representa el caso de la ciudad de Culiacán, Sinaloa en donde el pasado mes de mayo del 2008, durante tres días consecutivos la ciudadanía se retira a sus hogares por temor a ser víctima del fenómeno de violencia que se posesiono de la ciudad.

La democracia pierde, y la construcción de ciudadanía defensora y demandante de sus derechos civiles, políticos y sociales se muestra retraída, ausente, temerosa y de momento sin capacidad de respuesta ante una violencia que desborda por mucho los marcos normativos y al Estado.

Día a día la franja de los excluidos va engrosándose y diversificando su naturaleza, la exclusión coarta la posibilidad de construir ciudadanía social al cerrar el acceso a la riqueza producida socialmente, de ahí que no sea desconocido el peso de programas de asistencia social que se instrumentan desde el Estado intentando darles el tinte de justicia social y distribución equitativa de la riqueza. El excluido es tomado solo como un necesitado más y no como un ciudadano que pugna por un derecho. No dejar de lado que en el modelo neoliberal solo se ejercita el gasto social, el derecho social se encuentra en extinción.

En la sociedad globalizada, excluyente y patriarcal la construcción de ciudadanía no es un estatus natural y permanente asignado a los individuos por el hecho de nacer en un territorio, sino más bien debemos entenderla como un proceso desigual y en constante conflicto para su conquista, en reformulación y construcción permanente en donde se confronta cotidianamente la lógica de mercado que busca reproducir su ideología de consumo y el abandono de los derechos sociales.

Hoy, la reivindicación de los movimientos sociales y de la ciudadanía es por evitar el cierre de empresas y el despido de trabajadores fortaleciendo la vida sindical y la cultura política y de participación social pugnando por convertirse en auditores de la actividad pública.

Las demandas colectivas en el espacio público son una más de las manifestaciones de la democracia donde se lucha por el acceso al control democrático del Estado por parte de la sociedad, dando voz no solo al mercado sino reclamando también este derecho para los ciudadanos.

La expresión pública ciudadana reclama su derecho a vivir en un estado de garantías, donde se ejerzan libremente sus derechos civiles, políticos y sociales.

FUENTES DE CONSULTA

BARTRA, Armando (2008) *La gran crisis*. Consultado el día 10 de abril del 2009 de La Jornada, en:

<http://www.jornada.unam.mx/2009/04/10/index.php?section=opinion&article=010a1pol>

BAUMAN, Zygmunt (2005) "Vidas desperdiciadas: La modernidad y sus parias". España: Paidós. PP. 24.

CUNILL GRAU Nuria (2009) *Contraloría social y derechos sociales. El desafío de la integralidad*. Gestión y política pública, volumen VIII, número I, 1 semestre de 2009.

GALTUNG, J (2006) Trascender los conflictos. La perspectiva de Johan Galtung. Revista, No. 13, Futuros 2006. Vol. IV <http://www.revistafuturos.info> , consultado el 12/05/2008

GUERRERO, Rodrigo (1997) Epidemia de la violencia juvenil en América. En: *Espacios*, Revista Centroamericana de Cultura Política, Nº 10, julio diciembre.

MARSHALL. T. H. (1950) *Citizenship and Social Class and other Essays*, Cambridge University Press, Cambridge.

McALISTER, Alfred (1998) *La violencia juvenil en las Américas: estudios innovadores de investigación, diagnóstico y prevención*. Washington D. C.

LEWKOWICZ, Ignacio (2006) "Pensar sin Estado". Paidós, Argentina, pp. 20-31

OCAMPO BANDA, Luis E. (2007) "Conflictividad y sociedad civil en la democracia representativa". pp. 113-131 en Ocampo y Chávez, Coordinadores. Robinson Salazar Pérez, Director. *Voces y letras en insumisión. Movimientos sociales y reflexiones sobre América Latina*, Colección Insumisos Latinoamericanos. Argentina.

OCAMPO BANDA Luis E. (2008) Ciudadanías invisibles Estado ausente. Revista Ra Ximhai. Vol 4. Num 2 mayo-agosto 2008, PP 105-128.

RAMONET Ignacio (2009) La explosión del desempleo. Consultado el 04 de mayo de 2009 en: <http://www.rodelu.net/ramonet/ramonet200.html>

RASCÓN Marco (2009) Por un programa integral de ciudadanía. Consultado el día 12 de abril de 2009 de La Jornada en: <http://www.jornada.unam.mx/2009/04/14/index.php?section=opinion&article=018a2pol>
www.latinobarometro.org

Valdez, Javier & Castillo, Gustavo (13-05-2008). Colonos Sinaloenses aplican virtual "toque de queda". Consultado el día 13 de mayo de 2008 de La Jornada en: <http://www.jornada.unam.mx/2008/05/13/index.php?section=politica&article=005n1pol>